

San Fernando, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno.

VISTO:

LOS HECHOS:

LA DEMANDA:

PRIMERO: Comparece ante este tribunal don **Juan Pablo Abello Gómez**, abogado, en representación judicial de don **Ruben Alejandro Gallardo Leyton**, domiciliado en Calle Tomas Mendoza N° 189, Población Gabriela Mistral, comuna de Chimbarongo, quien en procedimiento de aplicación general interpone demanda de indemnización de perjuicios por lucro cesante y daño moral, en contra del empleador de su representado **Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Limitada**, rol único tributario N° 76.397.228-3, empresa del giro de extracción de piedra, arena y arcilla, entre otros, y como unidad económica en conjunto con la demanda principal, en contra de **Sociedad Áridos San Vicente Limitada**, rol único tributario N° 76.173.541-1, empresa del giro de extracción de piedra, arena y arcilla, entre otros, en contra de **Áridos e Inversiones San Vicente Limitada**, rol único tributario N° 77.894.100-7, empresa del giro de extracción de piedra, arena y arcilla, entre otros, en contra de **Sociedad de Transportes Messen Transporta Limitada**, rol único tributario N° 76.276.767-8, empresa del giro de transporte de carga por carretera, en contra de **Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y G Limitada**, rol único tributario N° 76.978.000-9, empresa del giro de explotación de estacionamientos de vehículos automotores, actividades inmobiliarias, entre otras, todas representadas legalmente por don **José Horacio Messen Gómez**, y en contra de **José Horacio Messen Gómez**, rol único tributario N° 7.391.794-8, persona natural con giro de preparación del terreno, transporte de carga por carretera, alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, forestal y de construcción, entre otros, demandados todos con domicilio en Hijuela 8, Fundo Centinela, comuna de Chimbarongo, en virtud de los siguientes fundamentos.

Sostiene que su representado comenzó a prestar servicios para **Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Limitada**, bajo vínculo de subordinación y dependencia en los términos del artículo 7° del Código del Trabajo, el día 14 de



junio del año 2018, misma fecha en la que se escrituró su contrato de trabajo, para realizar la labor de mecánico, funciones que según su contrato debía ejecutar en la comuna de Chimbarongo y/o cualquier comuna de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, debiendo además desplazarse en toda la zona geográfica que comprende la actividad de la empresa, en base a una jornada de trabajo de 45 horas semanales, distribuida de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas, y de 14:00 a 18:00 horas, con una hora de colación, bajo las órdenes de don Héctor Guzmán, a cambio de una remuneración promedio de los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2018, ascendente a la suma de \$558.888.

Señala que el día martes 23 de octubre del año 2018, su representado concurrió a las 08:00 horas a su trabajo, y alrededor de las 15:30 horas ingresó a la planta el camión placa patente ZK- 4531, de propiedad de la demandada Sociedad de Transportes Messen Transporta Limitada, y la batea placa patente JF-2600, de propiedad de la demandada Áridos e Inversiones San Vicente Limitada, con el objeto de que ésta última recibiera mantención, ya que presentaba una pana.

Refiere que en la planta había un pozo donde se revisaban los camiones y bateas, sin embargo, en él había una moledora de piedras y no había espacio donde efectuar la mantención, por lo que el señor Héctor Guzmán le indicó a su representado que no podía mover la moledora, y que debía revisar “así no más” el camión y batea, sin ingresar al pozo, y que se “metiera” abajo del camión y batea.

Expone que debido a la orden recibida, el señor Gallardo Leyton se tuvo que meter por debajo del camión y batea, y recostado en suelo de forma horizontal comenzó a revisar el lado izquierdo de esta última, pues tenía ese lado caído, y alrededor de las 15:50 horas, mientras ejecutada dicha labor, escuchó un sonido y notó que el pulmón de la batea -un amortiguador de los ejes de las ruedas-, que se ubican uno a cada lado de la batea, se estaba hinchando peligrosamente, y previniendo que el pulmón explotaría, comenzó a arrastrarse por debajo de la batea, sin espacio suficiente, ya que estaba en el suelo recostado, por lo que intentó arrastrarse hacia el lado izquierdo, momento en que el pulmón reventó.



Relata que al reventar el pulmón, al señor Gallardo Leyton le cayó la bomba de aire en la cabeza golpeándolo fuertemente, junto a esto, numerosas partículas de caucho y tierra ingresaron fuertemente en su ojo derecho, y además el eje de la batea o barra cayó golpeando directamente su pecho, clavícula y hombro derecho.

Explica que el al recibir este tremendo golpe, el señor Gallardo Leyton quedó “atontado” debajo del camión como 5 minutos, ya que no podía salir, y que luego dos compañeros lo sacaron de abajo tirando de sus pies, y avisaron a la secretaria de las demandadas del accidente, ya que sus jefes se habían retirado, por lo que su representado tuvo que esperar aproximadamente veinte minutos a que llegara su jefe don Héctor Guzmán, y cuando éste llegó vio que estaba aturdido, a quien le pidió que lo llevara a la Mutual de Seguridad porque le dolía mucho la cabeza y el ojo derecho, lo que finalmente ejecutó el bodeguero, el que lo llevó a la Mutual de Seguridad de San Fernando en la camioneta de la empresa, desde donde fue trasladado a la Clínica Visión de Rancagua, lugar en el que le hicieron un lavado de ojo y lo enviaron a su hogar.

Dice que el viernes 2 de noviembre –no indica año-, el señor Gallardo Leyton comenzó a sentirse muy mal y se desmayó, por lo que lo trasladaron de urgencia al Hospital de Chimbarongo y le hicieron reanimación, y cuando tuvo pulso fue trasladado al Hospital de San Fernando -sufriendo un nuevo desmayo mientras era trasladado a éste-, para finalmente ser derivado a la Clínica Integral, donde despertó seis días después de su ingreso.

Describe que el diagnóstico de las lesiones sufridas a consecuencia del accidente sufrido fue el siguiente: Contusión leve de hombro derecho, cuerpo extraño ocular conjuntival bilateral, contusión craneal, conjuntivitis, baro trauma acústico, trastorno de adaptación y trastorno de estrés agudo.

Menciona que luego de más de un año de tratamientos con múltiples especialidades, la Comisión de Evaluación de Incapacidades por Accidentes del Trabajo, otorgó a su representado un **35% de Incapacidad Laboral Permanente** por las secuelas de Disminución Agudeza Visual Ojo Derecho, Visión Ojo Derecho: 0.01 Tubular, Visión Ojo Izquierdo: 0.8, Cefalea Post Tec e Hipoacusia bilateral mayor a derecha.



En este contexto, afirma que el empleador no cumplió con el deber de seguridad que establece el artículo 184 del Código del Trabajo, pues no protegió de manera eficaz la vida y salud del trabajador, incurriendo un culpa levísima en su actuar, por lo que todas las demandadas, deudoras de la obligación de seguridad, incurrieron en los siguientes incumplimientos:

1. Enviar al trabajador a realizar labores en precarias condiciones, ya que el pozo estaba ocupado e igualmente se le ordeno revisar el camión.
2. No contar con las condiciones necesarias para realizar un trabajo profesional, y con los estándares de seguridad exigidos por el artículo 184 del Código del Trabajo.
3. No proteger la seguridad de sus trabajadores, al no evaluar los riesgos y consecuencias que generaba enviar a trabajadores a realizar labores riesgosas, sin contar con las medidas de seguridad adecuadas.
4. No tomar las medidas de seguridad necesarias, eficaces, idóneas, y preventivas en las labores realizadas.
5. No realizar el respectivo análisis de riesgos al interior de sus dependencias, para de esa forma evitar posibles accidentes, y graves secuelas en sus trabajadores.
6. Falta de planificación, al instruir a sus trabajadores con relación a las labores realizadas al interior de sus dependencias.
7. No contar con señalización que advierta el agente y/o condición de riesgo a la cual se expone el trabajador.
8. Ausencia de planificación y metodología documental, en cuanto a las gestiones y acciones a ejecutar en materia de salud y seguridad laboral.
9. Ausencia en la empresa de metodología para capacitar e instruir a los trabajadores en los procedimientos de accidentes de trabajo.

Por otro lado, sostiene que en todas las demandadas concurren los requisitos previstos en el inciso séptimo del artículo 3 del Código del Trabajo, para considerar que entre ellas se configura una unidad económica, pues Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Limitada, Sociedad Áridos San Vicente Limitada, y Áridos e Inversiones San Vicente Limitada, son empresas dedicadas al giro de



extracción de piedra, arena y arcilla, preparación del terreno, alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, forestal y de construcción, entre otros; a su vez, Sociedad de Transportes Messen Transporta Limitada, es una empresa dedicada al giro de transporte de carga por carretera; por su parte, Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y G Limitada, es una empresa dedicada al giro de explotación de estacionamientos de vehículos automotores, actividades inmobiliarias, entre otras; y por último, don José Horacio Messen Gómez es una persona natural con giro de preparación del terreno, transporte de carga por carretera, alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, forestal y de construcción, entre otros.

Aclara que don José Horacio Messen Gómez es representante legal de todas las empresas por si, o bien las maneja a través de su hija doña María Karina Messen Guajardo, quien es representante legal de Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones MyG Limitada, y que todos los demandados mantienen domicilio en Hijueta 8, Fundo Centinela, comuna de Chimbarongo, empresas que mantienen relaciones comerciales bajo una única dirección de mando, con giros comerciales complementarios y/o idénticos, actuando coordinadamente en una misma dirección y compartiendo además mismas infraestructuras, gestión empresarial y centros de operaciones.

En atención al accidente del trabajo sufrido por su mandante, reclama una indemnización por lucro cesante, cuyo cálculo que debe proyectarse sobre la base de una probabilidad razonable, para tratar de equiparar la situación que hubiere debido tener la víctima de no ocurrir el accidente, para lo cual se debe tomar en consideración los ingresos que ésta dejará de percibir al menos hasta su edad de jubilación, por lo que en definitiva esta partida consiste en la diferencia entre el patrimonio tal como estaba al momento de producirse el accidente laboral, y el que tendría por medio del aumento que no se ha realizado por causa directa de dicho accidente, y que, sin él, ciertamente se hubiera obtenido y logrado.

Alude que las lesiones sufridas por y con ocasión del contrato de trabajo, son de tal magnitud, que han ocasionado perjuicios físicos irremediables, como lo es el daño provocado en variadas zonas del cuerpo del demandante,



especialmente en sus ojos, en la zona del hombro y el área craneal, lo que le impedirá volver a desarrollar cualquier otra clase de actividad que realizaba anteriormente utilizando las zonas recién mencionadas, como así lo han señalado los doctores de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, quienes concluyen que el señor Gallardo Leyton ya no podrá volver a trabajar en ninguna labor física, que requiera esfuerzo o utilización de su vista.

Plantea que su representado al momento del accidente tenía 26 años de edad, por lo que le quedaban en estado normal 39 años de vida laboral activa, y que la remuneración que percibía aproximadamente a la fecha del accidente era de \$558.888, por lo que demanda por este concepto la suma de \$91.545.480, correspondiente al 35% de su remuneración mensual -\$195.610-, multiplicada por el tiempo que le resta para jubilar, correspondiente a 468 meses, porcentaje que corresponde al grado de incapacidad laboral evaluado por la CEIAT.

Por su parte, entiende que en el derecho chileno es indiscutible la procedencia del daño moral cuando deriva de un accidente del trabajo, pues el artículo 19 N° 1, inciso 1, y 4 de la Constitución Política de la Republica, en relación con el artículo 69 de la Ley N° 16.744, establecen expresamente tal clase de reparación, de manera que la lesión a los intereses patrimoniales origina un daño patrimonial o material, en tanto que la lesión a los intereses extra patrimoniales hace surgir un daño extra patrimonial o moral, interés que consiste en lo que es útil, por cualquier causa, aunque no sea pecuniariamente valuable, con tal que signifique un bien para el sujeto, que le satisfaga una necesidad, que le cause una felicidad o le inhiba de un dolor.

Recuerda que la doctrina ha definido el daño moral como el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida, lo que trae como consecuencia que la indemnización del daño moral se identifique en general con la expresión “precio del dolor”, sin embargo, como el concepto de daño moral no solo se refiere a aquel ocasionado en la sensibilidad física del individuo, sino que también incluye otras manifestaciones de esta especie de daño como los perjuicios estéticos o la



alteración de las condiciones de vida, la jurisprudencia ha terminado por definir el daño moral como aquel que lesiona un derecho extra patrimonial de la víctima.

Pese a lo anterior, argumenta que en nuestra tradición jurídica el daño no se restringe a la lesión de un derecho, sino de un legítimo interés, por lo que se puede definir el daño moral en un sentido amplio, como la lesión a los intereses extra patrimoniales de la víctima, con lo que es posible comprender en la reparación todas las categorías o especies de perjuicios morales y no solo el “precio del dolor”.

Dicho lo anterior, menciona que hasta el día 23 de octubre del año 2018, su representado era una persona totalmente sana, feliz, sin ningún problema físico, con 26 años de edad y toda una vida por delante, además de ser el principal sustento de su hogar compuesto por su madre y su hermana, pero, luego de ocurrido el accidente del trabajo, comenzó con un cuadro de sensación de malestar, mareo, sudoración, cefaleas repentinas, baja de presión y conciencia alterada, y luego de permanecer por más de un año y cuatro meses en tratamiento ininterrumpido en la Mutual de Seguridad, en el mes de febrero del año 2020 fue derivado a la Comisión de Evaluación de Incapacidad de Accidentes del Trabajo, que estableció los diagnósticos de Cuerpo Extraño Corneal Derecho y Contusión Craneal, y le otorgó un 35% de incapacidad laboral permanente, por las secuelas de Disminución Agudeza Visual Ojo Derecho, Visión Ojo Derecho: 0.01 Tubular, Visión Ojo Izquierdo: 0.8 y Cefalea Post Tec.

De esta forma, asevera que el accidente en comento cambió drásticamente la vida del señor Gallardo Leyton, ya que hubo situaciones donde quedó sentado, se mordía las mejillas y movía los brazos y piernas, aproximadamente dos minutos, para luego quedar desorientado, episodios que muchas veces ocurrían a diario y se repetían hasta siete veces al día, los que son precedidos por sensación de escalofríos, sudoración y sensación de cansancio; que también a veces quedaba pálido con ojos cerrados y con un temblor que duraba uno a dos minutos, para luego recuperarse en cinco minutos, y quedar agotado con la sensación de tener las piernas de lana.



En este contexto, detalla que a su representado ha sufrido la pérdida de los goces de la vida, o de las satisfacciones que la persona lesionada podría tener o esperar normalmente, atendido que día a día sufre las consecuencias del accidente, al no poder realizar las acciones que antes si podía, hace que sienta rabia y angustia, todo le afecta; ya no puede llevar la vida de antes, debido a la contusión craneal quedo con cefaleas crónicas que le vienen de repente sin ningún aviso, mientras que antes del accidente andaba en moto, corría en auto, cazaba e iba al gimnasio, todas actividades que ya no puede realizar debido a la pérdida de visión sufrida.

Añade que el daño psíquico dice relación con todo trastorno emocional ocasionado por un acontecimiento disvalioso, como lo es el sufrir un accidente del trabajo de carácter grave como el señalado precedentemente, el que tiene como nexo causal directo el accidente del trabajo y las consecuencias sufridas, producto de la imprudencia e irresponsabilidad con que actuó la demandada de autos, por cuanto el señor Gallardo Leyton siendo una persona de 26 años al momento de sufrir el accidente, se ha sentido muy desanimado, con mucha angustia y rabia por lo que le ha tocado vivir, y ha sufrido un tremendo daño psicológico lo que ha derivado en tratamiento siquiátrico y neurológico, quien quedó con un miedo permanente al sufrir mareos constantes, y a que alguien le pueda hacer algo, siente mucha angustia por su futuro, ya que era el principal proveedor de su familia y ya no puede trabajar, y quedó con desgano, apatía y angustia permanente.

Por todo lo anterior, y previas citas legales y de jurisprudencia pertinentes, solicita se acoja la presente demanda, que se declare que el accidente del trabajo sufrido por su representado es de responsabilidad de todos los demandados, que entre éstos existe unidad económica, y que se les condene solidariamente al pago de la suma de \$80.000.000 por concepto de daño moral, y la de \$91.545.480, por concepto de lucro cesante, todo lo anterior junto con los reajustes e intereses que correspondan, más las costas de la causa.

LA CONTESTACIÓN:

DE SOCIEDAD INVERSIONES Y ÁRIDOS SAN VICENTE LIMITADA.



SEGUNDO: En tiempo y forma, comparece la demandada Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Limitada, quien contesta la demanda en los siguientes términos.

En cuanto a la relación laboral, sostiene que efectivamente el demandante ingresó a prestar servicios para la demandada principal, el día 14 de junio de 2018, como mecánico, en base a una remuneración promedio de los últimos tres meses trabajados –agosto, septiembre y octubre del año 2018-, de \$426.147,

Describe que las principales labores del demandante consistían en reparar la maquinaria de Sociedad de Inversiones y Áridos San Vicente Ltda., tales como excavadoras, retroexcavadoras, plantas de procesamiento de áridos, entre otras.

Indica que en el transcurso de la relación laboral, el trabajador solo prestó servicios para dicha parte, que no es parte de ninguna unidad económica, ni tiene “coempleadores” que estén en los supuestos de los artículos 3 y 507 del Código del Trabajo, constituyéndose como su única empleadora, de manera que no comparte el domicilio con otras empresas o sociedades para obras o faenas, como tampoco el domicilio tributario con ninguna persona o empresa, no tiene giros complementarios con otra sociedad, cada de las demandadas son unidades independientes que no se relacionan en sus deberes y responsabilidades.

En este sentido, destaca que el demandante proporciona una serie de antecedentes con falta de veracidad, partiendo de la individualización de las empresas con la clara y única intención de confundir al tribunal, señalando domicilio y representación errónea, a fin de adecuar las circunstancias a su arbitrio para justificar una pretensión infundada que solo tiene por objeto obtener un enriquecimiento sin causa, con mentiras pretende buscar patrimonios de distintas personas o empresas.

Aclara que su parte terceriza el servicio de transportes, para que los camiones trasladen los materiales producidos por Sociedad de Inversiones y Áridos San Vicente Ltda., según lo acredita el contrato de prestación de servicios, suscrito notarialmente y vigente desde febrero de 2018 a la fecha, donde se estipula que es la propia empresa de transportes la que a su costa repara y se obliga a mantener en perfecto estado de conservación, los vehículos con los



cuales le otorga el servicio, de manera que en ningún caso los trabajadores de Sociedad de Inversiones y Áridos San Vicente Limitada, prestan servicios para los proveedores o prestadores de servicios de la empleadora, como lo es la empresa de transportes.

En lo que respecta al accidente del trabajo, reconoce que si bien es cierto el actor el día 23 de octubre de 2018, sufrió un lamentable accidente estando dentro de su jornada de trabajo, este no tuvo lugar por las causas señaladas en la demanda.

Asegura que es efectivo que existe un camión placa patente ZK-4531 de propiedad de Transportes Messen Ltda., el que fue puesto a su disposición para el traslado de los áridos que vende, el que llegó a las instalaciones de Sociedad de Inversiones y Áridos San Vicente Ltda., donde su chofer lo estacionó y le indicó al mecánico que lo revisara, porque al parecer tenía una abrazadera mala, ante lo cual el actor en el mismo lugar y sin que mediara orden alguna, contrario a todo lo que estaba prescrito en su procedimiento de trabajo seguro, en su contrato de trabajo y en el reglamento interno de la empresa, procedió a revisar de inmediato por su propia cuenta, sin tomar los resguardos necesarios y exponiéndose además imprudentemente al daño, pues el demandante no utilizó el área o pozo de reparación para arreglar la batea.

En este contexto, asevera que don Héctor Guzmán, el día del accidente no le dio ninguna orden al señor Gallardo Leyton de reparar dicha batea, ni siquiera se encontraba en la planta de áridos ni mucho menos en lugar del accidente, no sostuvo con anterioridad al accidente ningún tipo de comunicación con el demandante, ni con otro trabajador de la empresa, ya que se encontraba con permiso administrativo.

Precisa que cuenta con declaraciones que se hicieron a causa de la investigación, por parte del departamento de prevención de riesgos de los hechos del accidente, en las que consta el testimonio escrito personalmente por los testigos presenciales de éste, emitidas con fecha 24 de octubre de 2018, de las cuales se extrae que el demandante sin respetar los procedimientos internos de seguridad, se expuso imprudentemente al daño y actuó con un exceso de



confianza, imposible de prever por cualquier empleadora, pues sin que mediara orden alguna, quiso revisar la batea que presentó falla, pero no le indicó al chofer que la colocara en el pozo, sino que se metió debajo de ella en el mismo lugar que la batea quedó estacionada, y fue el demandante personalmente quien le dio instrucción al chofer del camión para que llenara el pulmón malo señalándole “dele aire al pulmón para que baje el puente”.

Expresa que ante dicha imprudencia su compañero don Ernesto Acuña -soldador de Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Ltda.-, que también estaba bajo la batea, decidió salir de ese lugar para evitar cualquier riesgo, porque se dio cuenta que pulmón se podía reventar, que incluso él y el chofer del camión le preguntaron a Rubén Gallardo si no existía peligro de que explotara el pulmón, ante lo cual éste “no creo que reviente porque no tiene peso”.

A la declaración anterior, suma la de don Marco Silva -testigo presencial, y quien trasladó a don Rubén a la Mutual-, el que señala que no hubo orden alguna de revisar el camión, y que don Héctor Guzmán no se encontraba ese día en la planta por lo que no pudo darle ninguna instrucción a don Rubén Gallardo; el mismo dependiente declara que él fue el encargado de entregarle personalmente en reiteradas ocasiones al demandante, todos los elementos de protección personal que requirió de acuerdo a su cargo de mecánico.

Agrega que la forma de notificar las reparaciones que deben hacerse a los vehículos y maquinarias, deben ser indicadas por escrito al empleador o a sus jefes directos, como una forma de controlar y realizar la compra de repuestos y organizar los días en que los vehículos permanecerán sin poder prestar servicios por estar reparándose, lo cual es coordinado por los administradores de la empresa, tal como se indica en el contrato de trabajo, en el procedimiento de trabajo seguro, y en el reglamento interno de la empresa, lo que constituye una medida eficaz para evitar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores.

Dice que su parte solo hubiese tenido responsabilidad en el accidente, si hubiese mediado una orden o instrucción que le indicara expresamente al trabajador hacerlo en un lugar no habilitado, señalándole que no utilizara los elementos de protección personal que diligentemente y de forma adecuada le



proporcionó, o hubiese omitido informarle o capacitarlo en la forma de realizar de forma segura las reparaciones.

Por otro lado, menciona que una vez ocurrido el accidente, el trabajador no mostró secuelas o daños evidentes, pero conforme al protocolo de accidentes de trabajo establecido en el reglamento interno de la empresa, fue trasladado por personal de su representada a la Mutual de Seguridad, a fin de que le dieran los primeros auxilios y tratamientos, y ante la cual se efectuó la correspondiente denuncia individual de accidente de trabajo, y de conformidad con el diagnóstico médico de “contusión leve de hombro” y “cuerpo extraño ocular conjuntival bilateral”, que el mismo actor reconoce en su libelo, el organismo asegurador le indicó que al no ser un accidente grave o fatal, no se debería ni siquiera notificar a la Inspección del Trabajo o SEREMI de Salud.

Por lo anterior, expresa que de manera voluntaria y como prevención de futuros accidentes, realizó la investigación del accidente y capacitó a los trabajadores para concientizar lo ocurrido describiendo la ocurrencia del evento, las medidas correctivas y aprendizaje del accidente, según da cuenta el documento denominado “Acta difusión interna accidente de Rubén Gallardo Leyton, de fecha 23 de octubre de 2018”, a lo que se suma el hecho que ni la Inspección del Trabajo ni SEREMI de Salud, cursaron por tanto ningún tipo de multa o instrucción a la demandada principal, por algún incumplimiento en materia de seguridad.

Refiere que con posterioridad al accidente, el trabajador presentó diversas licencias médicas que se tramitaron en tiempo y forma, de las cuales aún se encuentra haciendo uso, por lo cual se encuentra vigente el vínculo laboral con la empresa, y que desde la ocurrencia del accidente a la fecha de interposición de la demanda, la Mutual de Seguridad ha pagado todos los gastos médicos que ocurrieron con ocasión del mismo, como también se ha cubierto por parte de la empleadora todo daño emergente que pudo ocurrir con ocasión de la lesión, de manera tal que el trabajador no se ha visto afectado en su situación laboral.

Plantea que la obligación del empleador consiste en prevenir, capacitar, informar, y suprimir los factores de riesgo de las labores que realicen sus



trabajadores dentro de sus funciones, y una vez realizado esto, ya sea educando o prohibiendo la realización de determinadas conductas como lo hizo con el demandante, no tiene forma ni medios para impedir conductas imprudentes como la ejecutada por el actor, quien mediante un hecho temerario se expuso voluntariamente al riesgo, considerando que fue decisión propia no utilizar el lugar establecido por el empleador, como tampoco los elementos de protección personal que se le habían entregado, además de dar órdenes temerarias a sus demás compañeros de trabajo que advirtieron de inmediato el riesgo, entre otros.

Dice que Decreto 40 de la ley 16.744 establece como obligación del empleador la de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entraña sus labores, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correcto, y que los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa, es decir, todo lo cual ocurrió con anterioridad al accidente.

En este contexto, afirma que su representada adoptó las siguientes medidas para resguardar la vida y seguridad del demandante:

1. Sin estar obligada al efecto, su representada aun cuando solo tiene contratados a 20 trabajadores, siempre ha tenido un asesor en materia de seguridad de manera permanente, cargo que a la fecha del accidente lo detentaba el Ingeniero en Prevención de Riesgos, don Francisco García Varas, quien se encargó en su oportunidad de darle a don Rubén Gallardo todas las inducciones en materia de seguridad, le instruyó y capacitó, entre otras de los riesgos de sus funciones.
2. Entrega de elementos de protección personal: desde que fue contratado a la fecha del accidente -es decir, en un periodo de catorce meses-, el demandante recibió según un total de diecinueve guantes de cabritilla, once lentes oscuros de protección, ocho lentes claros, dos cascos de seguridad, dos protectores auditivos, veinticuatro overoles, dos calzados de seguridad, de manera tal que si éste hubiese utilizado los lentes proporcionados y los audífonos protectores, no habría sufrido las consecuencias por las cuales pide indemnización.



3. Al ingresar a prestar servicios por segunda vez en la empresa, se encuentra suscrito a nombre de don Rubén Gallardo, documento donde consta que participó en capacitación y difusión de procedimiento de trabajo seguro taller mecánico, en el que se definen las principales funciones, la forma de operar correctamente en su interior, la descripción de las tareas, analiza los riesgos en el trabajo, los riesgos y medidas preventivas, entre otros.
4. Existencia de documento denominado “Acta de Difusión Interna”, de fecha 18 de agosto de 2018, en el que consta que don Rubén Gallardo, participó en la capacitación y charla realizada por el asesor en prevención de riesgos, sobre autocuidado para prevenir riesgos, accidentes y enfermedades profesionales en el trabajo, estadísticas relacionadas con accidentes del trabajo, ejemplos de conductas inseguras en el lugar de trabajo, entre otros.
5. El demandado recibió el reglamento interno de la empresa, según consta en la cláusula séptima del contrato de trabajo, cuyo artículo 88 prohíbe a los trabajadores, entre otras, accionar maquinarias, equipos, mecanismos, sistemas eléctricos o herramientas, sin haber sido expresamente autorizado y encargado para ello, ejecutar trabajos o acciones para las cuales no está autorizado y/o capacitado, manejar, activar u operar maquinaria alguna sin haber sido autorizado.
6. La empresa informó al demandante acerca de los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos.
7. Suprimió de manera permanente los factores de riesgos y peligros en el lugar de trabajo, aplicando de forma eficiente y permanente las normas y protocolos de seguridad que contempla dentro de su actividad.
8. Construyó especialmente para el desarrollo de las funciones del demandante un lugar habilitado y seguro al efecto, le capacitó sobre los riesgos que podría sufrir, le otorgó los adecuados EPP, le prohibió realizar labores que lo pusieran en riesgo, y reforzó con señalética los riesgos presentes en su actividad.



De esta manera, concluye que si su parte cumplió con todas las medidas antes dichas, la víctima fue la que se expuso imprudentemente al daño, quien no tomó una posición segura y operó sin tomar en cuenta las indicaciones contenidas en los diversos documentos y capacitaciones.

En ese escenario, manifiesta que el lucro cesante constituye únicamente una mera expectativa y posibilidad, al no existir menoscabo cierto y real o comprobable, y que la exigencia de certeza del daño se desprende del artículo 1437 del Código Civil el que discurre acerca del “daño inferido”, que permite concluir que el daño debe haberse producido realmente, y no puede constituir suposiciones no probadas o establecerse bajo posibilidades abstractas.

De esta forma, alega que el actor no ha sufrido el menoscabo que indica, ya que su capacidad económica no se ha visto disminuida, por cuanto mantiene contrato vigente con la misma empleadora, por la misma remuneración y los perjuicios relacionados con la disminución de su capacidad se encuentran suficientemente cubiertos por el seguro contemplado en el artículo 35 de la ley 16.744.

A su vez, reclama que don Rubén Gallardo, recibió la indemnización contemplada en el artículo 35 de la ley 16.744, lo que según nuestra doctrina y jurisprudencia unificada, resulta incompatible con el resarcimiento del lucro cesante que intente perseguir por la vía de las normas generales, pues atienden al mismo fin.

Razona que se requiere de la certeza que el demandante trabaje de forma ininterrumpida, hasta que alcance edad de jubilarse, y que reciba la misma remuneración que ganaba al momento del accidente, a lo que se debe agregar que el actor continua prestando servicios a su empleador y sus licencias se le pagan en tiempo y forma; por lo demás, el solo hecho de una disminución física como lo es “conjuntivitis”, “dolores de cabeza”, “barotrauma acústico -presión u oídos tapados- no produce como acto reflejo que una persona dejará de percibir un porcentaje de ingresos igual al de la incapacidad determinada por los órganos de la seguridad social.



En lo que se relaciona con el daño moral, argumenta que éste debe ser probado en cuanto a su existencia y monto, a su relación de causalidad, y al dolo o culpa –en la materia que nos ocupa-, elementos éstos últimos que no concurren, atendido que la empresa cumplió con su deber de seguridad.

Respecto de lo intereses, recalca que éstos solo se deben desde que la indemnización es declarada.

Por todo lo anterior, y previas citas legales y de jurisprudencia, solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas.

DE SOCIEDAD DE TRANSPORTES MESSEN TRANSPORTA LIMITADA.

TERCERO: En tiempo y forma, comparece la demandada **Sociedad de Transportes Messen Transporta Limitada**, quien contesta la demanda en los siguientes términos.

Controvierte cada uno de los puntos que el demandante expresa en su demanda, y en particular señala que no se cumplen los requisitos exigidos en las disposiciones legales que contemplan la figura de la unidad económica a su respecto, para vincular a su parte con la demandada principal, pues la participación en la propiedad de las empresas no configura por si sola alguno de los elementos o condiciones señalados para estar en presencia de una multiplicidad de razones sociales, y que no comparte con aquella un mismo domicilio tributario.

Indica que nuestra legislación contempla variados mecanismos para poder asegurar el cumplimiento de obligaciones que puedan derivar de un juicio de indemnización de perjuicios, como son medidas precautoria en general, y de igual forma lo dispuesto en el artículo 444 del Código del Trabajo, pero no es la forma pretender, en base a subterfugios jurídicos, asegurar el cumplimiento de futuras obligaciones y vincular a personas jurídicas distintas, con patrimonio propio, que no comparten un mismo domicilio, y que no mantienen actividades económicas conjuntas.

Aclara que su parte cuenta y contaba a la fecha del accidente con sus propios mecánicos, respecto de quienes sí tiene que cumplir el deber de seguridad, pero no así con personas de empresas distintas que ni siquiera son



subcontratadas por ella, con lo que se desvirtúa cualquier responsabilidad que el actor pretenda que le sea resarcida.

Apunta que conforme a lo relatado por un chofer contratado por su parte, testigo presencial del accidente, se concluye que de manera voluntaria, imprudente y ajena a todo procedimiento de trabajo establecido en la empresa, el demandante no realizó su labor con el cuidado necesario, lo hizo sin utilizar sus elementos de protección personal, en un lugar diferente al que la empresa tenía habilitado, dando instrucciones imprudentes que ocasionaron que el pulmón explotara.

En base a lo anterior, afirma que la demandada principal había eliminado o suprimido los factores de peligro de las labores que realizaba el demandante el día del accidente, ya que le había otorgado procedimientos, informado de los riesgos de sus funciones, entregado sus elementos de protección personal, y tenía un lugar seguro donde se debían ejecutar sus labores, sin que mediara instrucción alguna de algún empleador.

Por otro lado, discute que la cantidad reclamada, es exagerada, en circunstancias que la responsabilidad civil no puede ser nunca fuente de enriquecimiento, sino una estricta indemnización satisfactoria de los perjuicios causados, vale decir, reemplazar mediante el dinero un bien o valor destruido, el cual en el caso en cuestión, aun cuando fuera responsabilidad de la empleadora, es una incertidumbre.

Refiere que no ha existido acción u omisión dañina, ni se ha causado perjuicio por esta parte al demandante, ni mucho menos ha existido culpa o dolo en el actuar de la empleadora.

A su vez, reclama que don Rubén Gallardo, recibió la indemnización contemplada en el artículo 35 de la ley 16.744, lo que según nuestra doctrina y jurisprudencia unificada, resulta incompatible con el resarcimiento del lucro cesante que intente perseguir por la vía de las normas generales, pues atienden al mismo fin.

Razona que se requiere de la certeza que el demandante trabaje de forma ininterrumpida, hasta que alcance edad de jubilarse, y que reciba la misma



remuneración que ganaba al momento del accidente, a lo que se debe agregar que el actor continua prestando servicios a su empleador y sus licencias se le pagan en tiempo y forma; por lo demás, el solo hecho de una disminución física como lo es “conjuntivitis”, “dolores de cabeza”, “baro trauma acústico -presión u oídos tapados- no produce como acto reflejo que una persona dejará de percibir un porcentaje de ingresos igual al de la incapacidad determinada por los órganos de la seguridad social.

En lo que se relaciona con el daño moral, argumenta que éste debe ser probado en cuanto a su existencia y monto, a su relación de causalidad, y al dolo o culpa –en la materia que nos ocupa-, elementos éstos últimos que no concurren, atendido que la empresa cumplió con su deber de seguridad.

Respecto de lo intereses, recalca que éstos solo se deben desde que la indemnización es declarada.

Por todo lo anterior, y previas citas legales y de jurisprudencia, solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas.

AUDIENCIA PREPARATORIA:

CUARTO: Con fecha 21 de julio de 2020, se desarrolla audiencia preparatoria, oportunidad en la que se tiene por evacuado el trámite de la contestación en rebeldía de los demandados **Sociedad Áridos San Vicente Limitada, Áridos e Inversiones San Vicente Limitada, Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M Y G Limitada**, y don **José Horacio Messen Gómez**.

Acto seguido, llamadas las partes a conciliación por el tribunal, en conformidad a las bases propuestas por éste, ella no se produce.

Luego, se fijan como **hechos no controvertidos**, los siguientes:

1. La existencia de la relación laboral, entre la demandante y la demandada principal.
2. Fecha de la ocurrencia de los hechos: 23 de Octubre de 2018.
3. Lugar de ocurrencia de los hechos.
4. Labor para la cual fue contratado el demandante.

Posteriormente, se fijan como **hechos a probar**, los siguientes:



1. Efectividad de que la parte demandante sufrió un accidente del trabajo en dependencias de la demandada principal, hechos y circunstancias.
2. Efectividad de que dicho accidente del trabajo, se produce por un incumplimiento del deber de seguridad previsto en el artículo 184 Inciso Primero del Código del Trabajo, por parte de la demandada principal, hechos y circunstancias.
3. Efectividad de que a consecuencias del eventual accidente del trabajo, la parte demandante ha sufrido un perjuicio constitutivo de lucro cesante y daño moral, monto de los mismos.
4. Monto de la remuneración percibida por el trabajador al momento del eventual accidente del trabajo y emolumentos que lo componen.
5. Efectividad de existir unidad económica entre todas las demandadas.
6. Efectividad de que el eventual accidente del trabajo, se produce por la imprudencia o exposición al riesgo imprudente por parte del trabajador, hechos y circunstancias.

Finalmente, las partes ofrecen los medios de prueba de que se valdrían en audiencia de juicio.

AUDIENCIA DE JUICIO:

QUINTO: Con fecha 15 de octubre, 16 de noviembre, y 16 de diciembre, todos de 2020, 3 de febrero, 1 y 4 de marzo, todos de 2021, se desarrolla la audiencia de juicio, instancia en la que las partes incorporan los siguientes medios de prueba:

Demandante:

Documental:

1. Contrato de trabajo celebrado entre don Rubén Alejandro Gallardo Leyton y la empresa Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Ltda., de fecha 14 de junio del año 2018.
2. Anexo de contrato de trabajo celebrado entre don Rubén Alejandro Gallardo Leyton y la empresa Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Ltda., de fecha 15 de septiembre del año 2018.



3. Informe de paciente de fecha 10 de enero del año 2019, emitido por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.
4. Ficha clínica del actor emitida por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción la cual consta de 27 hojas clínicas y está actualizada hasta el día 31 de enero del año 2019.
5. Liquidaciones de sueldo correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2018.
6. Consulta de situación tributaria de terceros en la página web del Servicio de Impuestos Internos, de todos los demandados.
7. Publicación del diario oficial de fecha 3 de julio del año 2018 relativa a solicitud de aprovechamiento de aguas subterráneas de Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y G Limitada.
8. Planilla de declaración y pago simultaneo de obligaciones previsionales de fecha 13 de julio del año 2018.
9. Hoja con resultado de órdenes de compra y contrataciones directas del portal Mercado Publico relativo a Áridos e Inversiones San Vicente Limitada
10. Hoja con resultado de órdenes de compra y contrataciones directas del portal Mercado Publico relativo a Sociedad Áridos San Vicente Ltda.
11. Ficha de proveedor Sociedad Áridos San Vicente Limitada.
12. Orden de compra N° 997-1027-SE19 Aumento Gravilla Codegua Vialidad O'Higgins.
13. Hoja con resultados de Órdenes de compra y contrataciones directas del portal Mercado Publico relativo a Sociedad Inversiones y Aridos San Vicente Ltda.
14. Tres hojas con impresiones de la página web www.aridosanvicente.cl, empresa, plantas móviles, servicios.

Testimonial:

Comparece don Salvador Hernán Moreno Zúñiga, y doña Yasna Karen Tello Ahumada, quienes legalmente juramentados, prestan declaración según consta en registro de audio del tribunal.

Respuesta de oficio:



1. De la unidad de Informes Médicos del Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de La Cámara Chilena de la Construcción de Santiago (Folio 65).
2. De la Inspección Provincial del Trabajo de San Fernando (Folio 158).
3. De la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (Folio 78).

De Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Ltda., demandada principal:

Documental:

1. Carpeta tributaria de Soc. Inversiones y Áridos San Vicente Ltda. que da cuenta del domicilio legal y tributario distinto al de las demás demandadas y de los giros o rubros acreditados ante SII.
2. Procedimiento de trabajo seguro para mecánico en empresa Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Ltda., firmada por don Rubén Gallardo Leyton.
3. Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad Sociedad de Inversiones y Áridos San Vicente Ltda.
4. Contrato de trabajo suscrito entre Sociedad Inversiones y Áridos y don Rubén Gallardo Leyton. De fecha 14 de junio de 2018.
5. Comprobante de permiso sin goce de sueldo o feriado a nombre de don Héctor Guzmán Magaña de fecha 22 de octubre de 2018, para faltar los días 22 y 23 de octubre de 2018.
6. Liquidaciones de remuneración de don Rubén Gallardo Leyton de los meses, agosto, septiembre y octubre de 2018, en las que consta su sueldo base y su remuneración total haber imponible.
7. Boletas de honorarios números 118, 122, 126, 130, 134 y 136 emitidas por don Francisco Javier García Varas, ingeniero en prevención de riesgos a Sociedad de Inversiones y Áridos San Vicente. Ltda., entre mayo y octubre del año 2018.
8. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, de fecha 27 de mayo de 2018, de Sociedad Inversiones y Aridos San Vte Ltda.



9. Denuncia individual de accidente de trabajo de don Rubén Gallardo Leyton de fecha 23 de octubre de 2018, suscrito por don Francisco García prevencionista de riesgos.
10. Documento emitido por departamento de prevención de riesgos de Soc. Inversiones y Áridos San Vicente Ltda., denominado Obligación De Informar Riesgos Laborales, elaborado por experto en prevención de riesgos.
11. Registro de entrega de Reglamento interno de orden, higiene y seguridad, suscrito y firmado por don Rubén Gallardo con fecha 16 de junio de 2018.
12. Documento denominado entrega de elementos de protección personal suscrito por don Rubén Gallardo.
13. Resolución de incapacidad permanente emitida por mutual, número siniestro 7396105.
14. Contrato de trabajo suscrito entre Soc. Inversiones y Áridos San Vicente Ltda., y don Ernesto Acuña Carroza, soldador, de fecha 01 de agosto de 2016, y su anexo de fecha 02 de diciembre de 2016.
15. Contrato de trabajo suscrito entre Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Ltda., y don Marco Silva Zamorano, de fecha 02 de diciembre de 2015, bodeguero.
16. Documento emitido por departamento de prevención de riesgos denominado declaración de accidente, suscrito y firmado por don Ernesto Acuña, testigo presencial.
17. Documento emitido por departamento de prevención de riesgos denominado declaración de accidente, suscrito y firmado por don Marco Silva, testigo presencial.
18. Registro de asistencia de capacitación de difusión de charla de seguridad realizada por prevencionista de riesgos, que tiene como participante a Rubén Gallardo suscrita y firmada por él.
19. Documento denominado Acta de difusión Interna de accidente Rubén Gallardo, toma de conciencia y análisis para evitar accidentes, respecto de charla de fecha 24 de Octubre de 2018.



20. Licencia médica del trabajador Rubén Gallardo Leyton de fecha 10 de julio de 2020, emitida por el médico Fabricio Zambrano Alcivar.
21. Factura electrónica N° 215237, emitida por la compra de elementos de protección personal, de fecha 28 de agosto de 2018, emitida por PROTEKNICA SEGURIDAD INDUSTRIAL Ltda., a Sociedad de Inversiones y Áridos San Vicete Ltda.
22. Factura electrónica N° 208748, emitida por la empresa SAFE Ltda., a Sociedad de Inversiones y Áridos San Vicente Ltda.
23. Factura electrónica N° 225758, emitida por la compra de elementos de protección personal, de fecha 3 de octubre de 2018, emitida por PROTEKNICA SEGURIDAD INDUSTRIAL Ltda., a Sociedad de Inversiones y Áridos San Vicente Ltda.
24. Factura electrónica N° 211783, emitida por la compra de elementos de protección personal, de fecha 22 de octubre de 2018, emitida por SAFE Ltda a Sociedad de Inversiones y Áridos San Vicente Ltda.
25. Certificado de conformidad y calidad de los elementos de protección personal comprados a la empresa de seguridad industrial SAFE.
26. Certificado de conformidad y calidad de los elementos de protección personal comprados a la empresa de seguridad industrial PROTEKNICA.
27. Registro ISP de fabricantes de productos de seguridad industrial que acredita la incorporación de la empresa PROTEKNICA.
28. Registro ISP de fabricantes de productos de seguridad industrial que acredita la incorporación de la empresa SAFE.
29. Certificado de multas a nombre de Soc. inversiones y Áridos San Vicente Ltda., por concepto de accidentes del trabajo o incumplimiento de su deber de seguridad.
30. Set de fotografías de taller mecánico dentro de las instalaciones de Soc. Inversiones y Áridos San Vicente. Ltda.

Absolución de posiciones:

Comparece don Rubén Gallardo Leyton, quien legalmente juramentado, presta declaración según consta en registro de audio del tribunal.



Testimonial:

Comparece don Ernesto Benjamín Acuña Carroza, y don Kevin Suarez Briones, quienes legalmente juramentados, prestan declaración según consta en registro de audio del tribunal.

Pericial:

Comparece don Simón de Jesús Payera Cuevas, perito, Mecánico Automotriz, cédula de identidad N° 17.108.422-9, quien legalmente juramentado, presta declaración según consta en registro de audio del tribunal.

Respuestas de oficio:

1. De la Mutual de Seguridad, de la comuna de Rancagua
2. De la Inspección Provincial del Trabajo de San Fernando (folio 72 y 76).

De Transportes Messen Transporta Ltda.

Documental:

1. Certificado inscripción y anotaciones vigentes camión placa patente ZK 4531-8 que registra como dato de propietario Sociedad de Transportes Messen Transporta Ltda.
2. Registro de mantenciones del taller del camión placa patente ZK4531-8 que da cuenta de reparaciones efectuadas por mecánicos de Transportes Messen desde el año 2018 hasta el año 2020.
3. Contrato de trabajo de mecánico de Transportes Messen Transporta Ltda., y anexo que acredita vigencia de la relación laboral en octubre de 2018, respecto a José Sepúlveda.
4. Factura de compra de abrazadera de fecha 25 de octubre de 2018, emitida por Francisco Vargas Contreras que da cuenta que la reparación que debe hacer al camión era una abrazadera y no el pulmón del camión.
5. Reporte del conductor Luis Díaz de fechas 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 30 de octubre de 2018 donde informa los viajes realizados y ninguna información u observación en cuanto a falla mecánica.
6. Carpeta tributaria de Soc. de Transportes Messen Transporta Ltda., que da cuenta del domicilio legal y tributario.



7. Facturas por servicio de transportes emitidas por Sociedad de Transportes Messen Transporta Ltda., a Sociedad de Inversiones y Áridos San Vicente Ltda.
8. Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad Sociedad de Transportes Messen Transporta Ltda.

De Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y G Ltda:

Documental:

1. Carpeta tributaria de Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y G Ltda.
2. Contrato de Arriendo de inmueble suscrito ante notario entre Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y G Ltda., y Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Ltda.
3. Copia de patente comercial de Sociedad Inmobiliaria MYG Ltda.

Testimonial:

Comparece don Yassin Ahamad Messen Guajardo, quien legalmente juramentado, presta declaración según consta en registro de audio del tribunal.

CONSIDERACIONES:

SEXTO: En lo que se refiere al **primer y segundo punto de prueba**, que se analizarán conjuntamente atendido su estrecha vinculación, es necesario precisar que del tenor de las contestaciones presentadas por **Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Limitada y Sociedad de Transportes Messen Transporta Limitada**, se constata que éstas no desconocen la existencia del accidente de trabajo, sino que se limitan a señalar que éstas no tienen responsabilidad por los daños sufridos por el demandante, ya que el siniestro se verificó por una conducta imprudente de éste, al no cumplir con los protocolos de seguridad que le fueron entregados oportunamente por el empleador, lo que se traduce en que el señor Gallardo Leyton omitió aplicar el procedimiento de trabajo seguro y usar los elementos de protección personal.

Sin perjuicio de lo anterior, y que el resto de las demandadas no contestó la demanda, resulta útil analizar la regulación que el legislador establece en la materia, para una mejor comprensión del conflicto sometido a decisión del tribunal.



En este sentido, el artículo 5 inciso primero de la Ley N° 16.744, que establece el Seguro Social contra Riesgos de accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, prescribe que se entiende por accidente del trabajo *“toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte”*.

De acuerdo al precepto transcrito, para calificar a un accidente como del trabajo, deben concurrir los siguientes elementos¹:

1. El accidente es consecuencia de un agente lesivo: para no confundir el concepto de lesión con el resultado dañoso muerte o incapacidad, se exige por parte del legislador la existencia de una “fuerza lesiva o agente energético”, que provoque la lesión.
2. Es necesario que exista una relación de causalidad u ocasionalidad entre la fuerza lesiva y el trabajo. La ocasionalidad ayuda a ampliar el concepto y no restringirlo solamente a que el trabajo sea la causa inmediata de la causa lesiva, sino que bastaría con que fuera mediata. En otras palabras, el accidente del trabajo puede tener su origen directo e inmediato en el trabajo ejecutado, y en el lugar y horas de trabajo –a causa-, así por ejemplo si el trabajador está manipulando una máquina y esa máquina le produce una lesión; o bien, puede tener una relación indirecta con el trabajo ejecutado, por ejemplo un accidente de trayecto entre la casa y el trabajo y viceversa.
3. Se requiere un resultado, una lesión que de origen a una incapacidad o a una muerte de la víctima directa, es decir, del trabajador.

De la lectura de las condiciones exigidas por el legislador, se concluye que éstos se estructuran sobre la base de criterios objetivos, sin que para configurar esta hipótesis de reparación, sea necesario calificar el cumplimiento de las obligaciones de protección que pesan sobre el empleador, pues éstos elementos se analizan en una etapa posterior, al momento de determinar el grado de responsabilidad por el que eventualmente deberá responder.

SÉPTIMO: Sin perjuicio de lo anterior, y al aplicar los requisitos descritos en este caso, en lo que se refiere al **agente lesivo**, se advierte que los hechos que

¹ Arellano Ortíz, Pablo, *Lecciones de Seguridad Social*, Librotecnia, Santiago, 2017, p. 304 y 305.



motivan este juicio tuvieron lugar por la explosión del pulmón del costado izquierdo de la Batea placa patente JF-2600, de propiedad de la demandada Áridos e Inversiones San Vicente Limitada; pues así lo reconocen el demandante, y las demandadas Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Limitada, y Sociedad de Transportes Messen Transporta Limitada, en sus respectivas contestaciones, e incluso aquellas que no contestaron la demanda, pues a su respecto el tribunal hará aplicación de la facultad que le confiere el artículo 453 N° 1 inciso séptimo del Código del Trabajo, y tendrá como tácitamente admitida esta circunstancia.

En segundo lugar, en cuanto a la **causalidad**, se tendrá por acreditado que el accidente de trabajo se produjo a consecuencia directa de la prestación de servicios por la cual el demandante fue contratado –mecánico-, la cual se ejecutó dentro de su horario de trabajo, esto es a las 15:30 horas del día 23 de octubre de 2018, en el interior de la planta de Áridos San Vicente, ubicada en Hijuela N° 8, Fundo San Fernando, comuna de Chimbarongo, pues así lo reconocen el demandante, y las demandadas Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Limitada y Sociedad de Transportes Messen Transporta Limitada, en sus respectivas contestaciones, e incluso aquellas que no contestaron la demanda, pues a su respecto el tribunal hará aplicación de la facultad que le confiere el artículo 453 N° 1 inciso séptimo del Código del Trabajo, y tendrá como tácitamente admitida esta circunstancia.

Lo anterior, además es señalado por el señor perito al momento de evacuar su informe y al declarar en la audiencia de juicio respectiva.

Finalmente, el **resultado lesivo** se tendrá por probado, en virtud de la Resolución de Incapacidad Permanente N° 20200384, de fecha 28 de febrero de 2020, la que establece que a consecuencia del accidente ocurrido el día 23 de octubre de 2018, mientras prestaba servicios para la demandada principal, al demandante, por los diagnósticos de Cuerpo Extraño Corneal Derecho y Contusión Craneal, se le calificó con un 35% de incapacidad laboral permanente, por las secuelas de disminución agudeza visual ojo derecho, visión ojo derecho: 0.01 tubular, visión ojo izquierdo: 0.8, y cefalea Post-Tec.



Además, así lo reconocen el demandante, y las demandadas Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Limitada y Sociedad de Transportes Messen Transporta Limitada, en sus respectivas contestaciones, e incluso aquellas que no contestaron la demanda, pues a su respecto el tribunal hará aplicación de la facultad que le confiere el artículo 453 N° 1 inciso séptimo del Código del Trabajo, y tendrá como tácitamente admitida esta circunstancia.

De esta forma, el tribunal tendrá como un hecho asentado en la presente causa, la ocurrencia del accidente de trabajo, en los términos recién descritos.

OCTAVO: Aclarado lo anterior, reviste especial relevancia en este juicio las circunstancias en las que tuvo lugar el accidente señalado, pues como ya se adelantó, las defensas de las demandadas **Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Limitada y Sociedad de Transportes Messen Transporta Limitada**, apuntan a que el demandante no cumplió con las medidas de seguridad procedimentales y materiales proporcionadas por el empleador.

Lo anterior, compele al tribunal verificar si la demandada principal, cumplió con su deber de garantizar la protección de la vida y salud del demandante, dentro del marco de la ejecución del contrato de trabajo. Ello es una concreción en este ámbito de la regla contenida en el artículo 1698 del Código Civil, de acuerdo al cual: *“Incumbe probar las obligaciones o su extinción, al que alega aquella o ésta”*, pues solo si el empleador acredita que cumplió con su deber de seguridad, carecerá de responsabilidad, o bien ésta será atenuada.

En este contexto, la piedra angular sobre la cual se erige el deber en comento, es el artículo 184 inciso primero del Código del Trabajo, el que establece que: *“El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”*.

De la atenta lectura del precepto transcrito, se advierte que el legislador impone al empleador una carga circunscrita al deber de informar sobre los riesgos del trabajo encomendado al dependiente, de proveerle de las condiciones de



higiene y seguridad adecuadas en el lugar en que se prestan los servicios, como también de las herramientas necesarias para prevenir un accidente de trabajo.

Una concreción reglamentaria de este mandato legal, se encuentra en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 40 sobre Prevención de Riesgos Laborales, norma que regula el denominado derecho de información de que es titular el trabajador, y que se traduce en que: *“Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa”*.

El cumplimiento de este deber ha de tener lugar al momento de la contratación o de crear actividades que impliquen riesgos, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 23 del decreto ya señalado.

NOVENO: Fijado este marco, para estos efectos, la demandada principal incorpora documento “Procedimiento de Trabajo seguro Taller Mecánico”, suscrito por el demandante con fecha 15 de junio de 2018, es decir, al día siguiente de que éste ingresara a prestar servicios a la empresa.

En dicho instrumento, se señala en lo pertinente que el trabajador *verificará el estado físico y funcionamiento de equipos y herramientas, deberá informar de inmediato a su Jefe Directo cuando se detecten condiciones o acciones de riesgo que puedan ser peligrosas tanto para su integridad física, como para sus compañeros de trabajo, y que deberá utilizar en todo momento los implementos de seguridad y elementos de protección personal dispuestos por la empresa para el desarrollo de las diferentes actividades.*

A su vez, en la página seis de dicho instrumento, en lo que respecta al inicio de las labores, se establece como responsabilidad del demandante *el bloqueo de las fuentes posibles de energía, ya que para intervenir cualquier equipo, se deberá verificar que las fuentes de energías estén bloqueadas, tales como neumáticas, hidráulicas, eléctricas; además, que el mecánico deberá determinar el método de extracción del componente o repuesto de tal modo que no le cause ningún daño físico o esté en peligro su vida, utilizando las herramientas y elementos de protección personal adecuados.*



En este mismo orden de ideas, en la página ocho del procedimiento referido, se señala como etapa de trabajo el “Desarrollo de la actividad de Mantenimiento”, que es la propia del demandante, donde se indica como peligro/riesgo/impacto el *“Golpeado por, Explosiones, Golpeado contra, Caídas de Mismo Nivel, Caídas Distinto Nivel, Sobreesfuerzo, Contacto con energías Hidráulicas, Eléctricas o Neumáticas”*, a cuyo respecto se establecen como medidas preventivas, en lo que para los efectos de este juicio importa, el *uso de Elementos de Protección Personal, incluyendo arnés de seguridad y ropa para trabajo en caliente, si se requiere, y verificar el estado de bloqueo del equipo.*

A reglón seguido en la página nueve, se previene como responsabilidad del trabajador el comprobar el bloqueo físico, para lo cual debe *asegurarse de que todas las fuentes de energía hayan sido aisladas y bloqueadas; probar que la energía del circuito a intervenir está en cero y no existe energía residual; y comprobar que está bloqueado el equipo correcto.*

DÉCIMO: Es decir, en criterio de este juez, el empleador cumplió cabalmente con la obligación que pesa sobre él en este punto, ya que detalló claramente cuáles son los riesgos del trabajo de mantenimiento y reparación en el taller mecánico donde se desempeñó el demandante, las medidas preventivas que éste debía cumplir, y los métodos de trabajo correctos que debía ejecutar, todos los cuales tienen una evidente orientación a la protección de la seguridad del señor Gallardo Leyton, según se reiterará más adelante.

DÉCIMO PRIMERO: Dichas instrucciones, son reforzadas por el empleador, mediante charla de autocuidado en lugar de trabajo, de fecha 18 de agosto de 2018, donde se tratan temas tales como: ejemplos de acciones y/o conductas en el lugar de trabajo, decisiones buenas y malas en relación a determinados factores de riesgo.

En dicha capacitación participa el señor Gallardo Leyton, pues en el acta de asistencia, consta su firma.

DÉCIMO SEGUNDO: Por otro lado, según se advierte del documento “Entrega de elementos de Protección Personal”, firmado por el señor Gallardo Leyton, a éste se le entregaron guantes cabritilla –el 28 de septiembre de 2018-,



lentes oscuros – el 3 de octubre de 2018-, y overol tela –el 29 de septiembre, 3 y 10 de octubre, todos de 2020-. Se toman en consideración solo éstas fechas, pues son las más cercanas al accidente en estudio, pero es necesario hacer presente que anteriormente, los mismos elementos de protección fueron entregados al actor.

De esta forma, los dichos del demandante manifestados en el peritaje, no desvirtuados por ningún otro medio de prueba, donde señala que su empleador solo le entregó como elemento de protección personal overol y guantes, son incongruentes con la declaración formulada por éste en el documento detallado en el párrafo anterior, pues consta de su firma que éste recibió, además, como medio de protección, lentes oscuros.

Es más, en el detalle de la declaración del demandante contenido en el mismo informe pericial, se lee que éste al ser consultado por el señor perito sobre *¿qué medidas tomo usted al momento de inspeccionar la batea?*, el señor Gallardo Leyton indica: *“todas las necesarias para protegerme”*, y al contestar cuáles eran éstas, responde: *“Lentes, casco, zapatos, protector auditivo”*.

En otras palabras, el tribunal entiende que el empleador proporcionó al demandante todos los elementos de protección personal ya descritos, en cumplimiento de su obligación legal y reglamentaria y aludida, y que éstos eran idóneos para desempeñar su laboral, siempre ello dentro del marco de los riesgos y procedimientos de trabajo seguro informados por la demandada principal.

DÉCIMO TERCERO: Dicho lo anterior, cobra relevancia las conclusiones a las que arriba el perito mecánico en su informe, donde señala que si bien el demandante *“optó por algunas medidas mínimas de seguridad, como acuñar el móvil rodante y usar sus elementos de seguridad, se vislumbran ciertos atisbos de que el Sr. Gallardo no previó ciertas situaciones de riesgos inherentes a la manipulación de un sistema neumático, como la principal e iniciales vaciar la presión de este (pulmones), toda vez, que cualquier persona que manipula un sistema de presión presurizado, debe previamente vaciar la presión del aire que contiene el circuito neumático, situación que indudablemente no ejecutó, y conllevó a la provocación del accidente en comento”*.



Dicha premisa es congruente con lo relatado por el mismo señor Gallardo Leyton en su demanda, en la que hace presente que *“notó que el pulmón de la batea -un amortiguador de los ejes de las ruedas, que se ubican uno a cada lado de la batea, se estaba hinchando peligrosamente, y previniendo que el pulmón explotaría, comenzó a arrastrarse por debajo de la batea, no teniendo espacio suficiente, ya que estaba en el suelo recostado, por lo que intentó arrastrarse hacia el lado izquierdo, momento en que el pulmón de la batea reventó”*.

De esta forma, se advierte que la conclusión a la que arriba el perito es coherente con el hecho de que el demandante antes de situarse por debajo de la batea no verificó que el pulmón descompuesto careciera de energía residual acumulada. En este escenario, el no vaciar la presión de los pulmones de la batea, constituye en el entendido del tribunal, una infracción a una de las obligaciones que en este aspecto recaen sobre el trabajador, reseñadas en el procedimiento de trabajo seguro antes dicho, específicamente la de *probar que la energía del circuito a intervenir está en cero y no existe energía residual* –página nueve-.

En consecuencia, el tribunal concluye que el empleador cumplió con el deber de seguridad, por lo que los daños que padeció el demandante no se deben a un actuar negligente de la empresa, sino que, por el contrario, éstos se produjeron por una conducta que en este caso se atribuye exclusivamente al trabajador.

DÉCIMO CUARTO: La conclusión recién anotada es relevante, porque aunque la legislación impone al empleador la responsabilidad principal en la prevención de los riesgos, así como la obligación de mantener los lugares de trabajo en óptimas condiciones sanitarias, a los trabajadores les corresponde asumir un de colaboración activa en la prevención, información y denuncia de estos riesgos, así como en el control de la recta aplicación de los preceptos contenidos en la ley².

Lo expuesto, se vincula con lo que en doctrina se conoce como culpa exclusiva de la víctima, conforme a la cual una vez acreditada la ausencia de culpa del agente, es indiferente que el daño se haya producido por una razón

² Melis y Sáez, citado por Gamonal Contreras, Sergio, y Guidi Moggia, Caterina, *Manual del Contrato de Trabajo*, Thomson Reuters, Santiago, 2015, p. 153.



imputable o no a la víctima, pues, en cualquier caso, esta carecerá de legitimación para traspasar el costo de su accidente al demandado, cobrando aplicación la regla general según la cual la propia víctima deberá soportarlo³.

Sin perjuicio de lo anterior, y si bien es cierto que en este litigio se acreditó que la demandada principal cumplió con su deber de seguridad, y que el demandante ejecutó sus funciones sin cumplir con el procedimiento de trabajo seguro oportunamente entregado por su empleador, resulta útil para una mayor claridad, señalar además que el dependiente no acreditó que éste comenzó el trabajo de mantención de la batea en cuestión y en la forma que lo hizo, por instrucción del señor Héctor Guzmán, pues no existe ningún medio de prueba que así lo compruebe.

En efecto, el testigo aportado por el señor Gallardo Leyton, don Salvador Moreno Zúñiga, declara que llegó a la planta cinco o diez minutos después del accidente, de lo cual se extrae que éste no percibió ninguna de las circunstancias en las que tuvo lugar el accidente.

Por todo lo anterior la demanda será rechazada en todas sus partes, y se omitirá pronunciamiento respecto de los demás puntos de prueba, por ser ello innecesario.

DÉCIMO QUINTO: El resto de la prueba rendida y también analizada en conformidad a las reglas de la sana crítica, en nada altera lo hasta ahora razonado ni lo que a continuación se resolverá, pues solo contribuye a reforzar los argumentos ya señalados.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, artículos 184, 453, 454, 456, 459, artículo 5 de la Ley N° 16.744, artículo 21 del sobre Prevención de Riesgos Laborales, y demás normas aplicables, se **RESUELVE:**

- I. Que se rechaza la demanda interpuesta por don **Juan Pablo Abello Gómez**, abogado, en representación de don **Ruben Alejandro Gallardo Leyton**, en contra **Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Limitada**,

³ San Martín Neira, Lilian, "La frontera entre culpa exclusiva y concurrente de la víctima en la producción del daño a la luz de la jurisprudencia chilena", Revista Chilena de Derecho Privado, N° 27, Santiago, 2016, p. 16.



de **Sociedad Áridos San Vicente Limitada**, de **Áridos e Inversiones San Vicente Limitada**, de **Sociedad de Transportes Messen Transporta Limitada**, de **Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y G Limitada**, y de don **José Horacio Messen Gómez**, todos ya individualizados, en todas sus partes.

- II. Que no se condena en costas al demandante, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Se ordena el registro de esta sentencia, su notificación por correo electrónico a Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Limitada, a Sociedad de Transportes Messen Transporta Limitada, y a Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y G Limitada, y por cédula a Áridos e Inversiones San Vicente Limitada, Sociedad Áridos San Vicente Limitada, y a don José Horacio Messen Gómez, por receptor de turno, y el archivo de los antecedentes en su oportunidad.

RIT: 0-33-2020.

Sentencia dictada por Felipe Eduardo Cabrera Celsi, juez titular del Primer Juzgado de Letras de San Fernando.

